

Propuestas para un economía justa y sustentable

contribución a la Cumbre de los Pueblos

Rio+20
Junio 2012

Índice

PRESENTACIÓN	3
1. Fundamentos de una nueva economía orientada a satisfacer dignamente las necesidades de los seres humanos respetando los sistemas naturales de la vida y del planeta	4
2. Hacer frente a la tiranía del capital financiero y especulativo	5
3. Organizar un nuevo sistema monetario articulando múltiples monedas y reforzando los pilares de un intercambio solidario, sustentable y democrático	7
4. Transitar del crecimiento ilimitado hacia un “decrecimiento diferenciado” y un “crecimiento orgánico”	9
5. La producción y el consumo no deben estar guiados por el mercado sino por la satisfacción de las necesidades. La urgencia prioritaria es reducir las desigualdades y erradicar la pobreza	11
6. La relación de los seres humanos con la naturaleza debe replantearse desde una perspectiva de cooperación	13
7. La economía del cuidado debe ser valorada porque responde a necesidades humanas vitales y fundamentales	14
8. Promover y desarrollar la seguridad y la soberanía alimentarias	15
9. Formular y promover una economía de los bienes comunes	17
10. Hacer posible la transición hacia una biocivilización por la sustentabilidad de la vida y el planeta	18
HACIA LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS EN RIO+20	20

Este **Cuaderno de Propuestas** ha sido preparado por Gustavo Marín con el apoyo de Germà Pelayo y los aportes de Candido Grzybowski, Matthieu Calame, Jorge Romano y Paul Raskin, retomando las presentaciones y el debate consagrado a la economía durante el seminario organizado por IBASE, el Foro por una nueva Gobernanza Mundial (FNGM) y EURALAT en Rio de Janeiro del 10 al 12 de Agosto 2011. Sirvió además como texto de base para el Grupo Temático Finanzas y Economía Justa Sustentable y Solidaria del Foro Social Temático de Porto Alegre del 24 al 29 de Enero 2012.

PRESENTACIÓN

La gravedad de la crisis ambiental actual es expresión de una crisis mas profunda, una crisis civilizatoria del capitalismo moderno basada en la predominancia del mercado desregulado, la especulación financiera, el consumismo desenfrenado, la búsqueda constante de crecimiento, la injusticia económica y la pobreza para muchos. Frente a las actuales y previsibles consecuencias devastadoras de un conjunto de crisis sistemáticas y recurrentes, se impone la necesidad urgente de cambiar profundamente la organización económica y política de las sociedades actuales y abrir paso a un mundo sustentable, justo y solidario.

La urgencia es clara: no se trata sólo de salir del capitalismo, sino además, es preciso cambiar de modelo de civilización. La humanidad ha entrado en un periodo prolongado de transición donde el cambio de civilización no es un recurso retórico, sino un desafío histórico ante el cual están enfrentados los pueblos en el siglo 21. Para ello hay que empezar por develar y desmontar los mecanismos del modelo capitalista dominante, régimen basado en la apropiación y control privado de la producción y el consumo orientado a maximizar el lucro. Al mismo tiempo, es necesario poner en marcha las alternativas de cambio. Pero, ¿cómo serán los nuevos modelos económicos del siglo 21? Pero, ¿cómo serán los nuevos modelos económicos del siglo 21? ¿Qué nuevos sistemas financieros, productivos, distributivos? ¿Con qué matrices energéticas? Existen muchas ideas y experiencias a escala territorial, regional, de la nueva economía que se requiere. Es preciso dar cuerpo a una visión que articule la dimensión local con la mundial para reforzar los primeros pasos de una nueva economía que los pueblos y el planeta precisan.

Para ello es necesario deslegitimar los mitos de la economía oficial y pasar de la economía neoclásica a la economía política, es decir, a una nueva economía con ideas, conceptos y visiones diferentes que den cuenta de la complejidad de los procesos en curso en este periodo de transición. La economía política debe ser recuperada como una ciencia humana, inexacta, superando los mitos de una supuesta economía inmanente, con leyes inmodificables.

1.

Fundamentos de una nueva economía orientada a satisfacer dignamente las necesidades de los seres humanos respetando los sistemas naturales de la vida y del planeta

Algunos principios de esta nueva visión son el cuidado, la cooperación, la solidaridad, la participación, la satisfacción de las necesidades básicas. Pilares fundamentales del nuevo modelo a construir son el acento prioritario en la dimensión humana, en la escala del territorio y la proximidad, en la necesidad de reducir la riqueza para disminuir la pobreza, en la redistribución justa, en la corresponsabilidad y la ética de la igualdad. Si por un lado, las experiencias a escala territorial deben y pueden dar sustento al proceso de transición, por el otro, mientras más se tarde en consensuar los principios fundamentales relacionados con la regulación y las políticas a gran escala, más se tardará en implementar las propuestas de cambio a escala mundial y las consecuencias sociales y ambientales serán desastrosas. En este escenario no se debe descartar que las fuerzas dominantes del sistema vigente obrarán para que cualquier intento de cambio radical no quede finalmente más que en una reforma puramente cosmética, en el caso que se lograra avanzar en algunas reformas. En cualquier caso, los desafíos son tan grandes y decisivos que la actitud más prudente es la de enfrentarlos y superarlos.

Los cambios en la esfera económica deben ir de par con la transformación del sistema político. Hay que avanzar simultáneamente en todos los frentes. Asimismo, la articulación de la esfera económica con la política debe sustentarse en los fundamentos éticos de una biocivilización para la sustentabilidad de la vida y el planeta. Se trata de un conjunto complejo y articulado entre fundamentos éticos, economía y política donde cada dimensión depende de la otra y se refuerzan recíprocamente.

Tres aspectos del modelo económico actual deben ser afrontados urgentemente: la tiranía del capital financiero y especulativo, la inestabilidad del sistema monetario concentrado en las monedas de las economías dominantes y la irracionalidad de la pauta de crecimiento ilimitado como criterio fundamental de bienestar de las sociedades.

2.

Hacer frente a la tiranía del capital financiero y especulativo

¿Cómo regular el sistema financiero que se oculta detrás del secreto bancario, los paraísos fiscales, la concentración del poder en plutocracias, en clubes cerrados?

Hoy es cada vez más evidente que el capital financiero está estrangulando a la sociedad, está acabando con los derechos ciudadanos, con los derechos de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios sometidos al peso del endeudamiento. Ante el controvertido debate público que generó la crisis financiera abierta el 2008, es inadmisibles que los dirigentes de las instituciones financieras y de los organismos estatales responsables de dicha crisis no hayan sido obligados a asumir su responsabilidad civil o penal. Al contrario, se les ha ofrecido nuevos cargos como consejeros o especialistas para la resolución de la crisis ¡que ellos mismos han generado!

En este contexto, junto al empantanamiento de la economía de Estados Unidos, el riesgo de hundimiento de la economía europea es cada vez mayor. Un deterioro de la situación económica en Europa podría conducir a una nueva gran depresión mundial y a una situación de caos sin precedente y de consecuencias impredecibles. Ante esto, salvar bancos, reflotar deudas y desarrollar acciones desesperadas de auxilio financiero a última hora no es suficiente y solamente sirve para retrasar lo inevitable: la necesidad de transformar radicalmente las reglas del sistema financiero, antes de que el engranaje depresivo de éste acabe con conquistas sociales que costaron la vida de millones de ciudadanos europeos a lo largo del siglo pasado.

Las políticas para la regulación del sistema financiero ya son conocidas:

- Suprimir de una vez por todas los paraísos fiscales y acabar también de una vez por todas con el secreto bancario. El Talón de Aquiles del sistema bancario, en particular del suizo, reside en un código que oculta las cuentas de especuladores y traficantes. Las cuentas de-

ben ser transparentes y los nombres y direcciones de todos los que depositan dinero en los bancos deben ser declarados en los mismos bancos y en los sistemas fiscales de los países donde los depositantes deben pagar impuestos.

- Se debe aplicar una tasa a los intercambios bancarios y financieros. Esta tasa (inspirada por la propuesta de James Tobin en 1971...cuarenta años ya) aunque pudiese ser baja, concentrada en las operaciones financieras y sin gravar las inversiones, significará una fuente considerable de recursos financieros. Se han hecho múltiples cálculos sobre los recursos que esta medida podría generar para solventar las necesidades de reducción de la pobreza, permitir el acceso al agua potable a millones de personas, prevenir enfermedades masivas, etc.. Lo importante es que esos recursos sean administrados por una instancia no burocrática donde las organizaciones ciudadanas puedan expresar directamente sus necesidades, ejercer un control sobre la asignación de los recursos y velar por el buen funcionamiento de los programas financiados.

- Esta relación entre la tasación de los flujos financieros y la organización transparente y democrática de los recursos obtenidos pone de relieve la necesaria articulación entre las medidas económicas y la organización social y política de una nueva economía. Para decirlo más directamente: no se saca nada con imponer un impuesto a las transacciones financieras si los recursos que se obtengan serán manejados por los mismos bancos... ¡o por el FMI! Se necesita crear un nuevo organismo, una suerte de *Fondo Económico y Social Mundial* conformado por un colectivo amplio que no dependa de los gobiernos más poderosos, sino de un colegio ampliado de gobiernos, trabajadores, organizaciones sociales y empresarios responsables de la asignación de los fondos financieros definida de manera transparente.

- La banca puede ser estatal, privada o mixta. Lo importante es que los bancos jueguen el rol de facilita-

dores de los intercambios sin transformarse en agentes creadores de moneda o vehículo para operaciones especulativas. Para ello se debe limitar los préstamos que puedan otorgar al monto de sus reservas con el fin de impedir que estimulen un engranaje especulativo de creación monetaria que multiplique sin bases sólidas las reservas reales que mantienen. En este contexto es necesario apoyar las redes de bancos a nivel territorial y los sistemas de crédito cooperativo por sectores socioprofesionales y agrupaciones poblacionales. Ya se ha comprobado que este tipo de sistema financiero a escala humana es eficaz y responde mejor a las necesidades de millones de ciudadanos y familias de los sectores medios y pobres.

3.

Organizar un nuevo sistema monetario articulando múltiples monedas y reforzando los pilares de un intercambio solidario, sustentable y democrático

Plantear que los bancos no sean los entes generadores de moneda abre necesariamente la cuestión de la creación monetaria y la articulación entre las distintas monedas. ¿Quién debe entonces crear la moneda? ¿Cómo deben relacionarse las monedas entre ellas? Estas preguntas tocan al corazón no sólo de los sistemas financieros y monetarios, sino además abren las puertas a reflexiones e invitan a propuestas capaces de pensar y cambiar radicalmente las reglas del juego de la economía dominante, haciendo posible poner en marcha nuevos mecanismos orientados por la nueva economía que la sustentabilidad de la vida y del planeta requieren.

En este contexto es necesario que los entes creadores de moneda no estén centralizados en los bancos centrales de las economías dominantes. Es preciso propiciar una amplia variedad de monedas, regionales y sectoriales, que ya existen en algunos países y regiones y responden mejor a los requerimientos específicos del comercio y de los intercambios. Las monedas pueden entonces ser creadas por diversos entes públicos, elegidos democráticamente y funcionando con mecanismos transparentes de información y de toma de decisiones. De esta manera las monedas contarán con la confianza indispensable de los ciudadanos.

Además, la diversidad de monedas no debe sólo responder a la diversidad regional, sino también a las diversas categorías de bienes y productos. El modelo económico dominante ha metido todos los bienes y servicios en el mismo saco uniformizándolos y haciendo del mercado capitalista el medio exclusivo y excluyente de atribución de sus valores. La realidad es más compleja y no se la puede forzar al marco reductor del mercado capitalista el cual, ya se sabe, está controlado y manipulado por prácticas e intereses de grupos plutocráticos y especuladores. Por lo demás, este mercado capitalista

dejado por sí solo, ya está comprobado también, no sólo es fuente de desigualdades, sino también es incapaz de responder a los nuevos desafíos de la regulación del cambio climático y de la sustentabilidad de la vida y del planeta.

La indispensable regulación del mercado capitalista debe entonces ir acompañada de la promoción de otros sistemas de intercambio que faciliten la circulación de bienes y servicios que no entran en la lógica del modelo dominante. Hay bienes y servicios que deben ser identificados con otras monedas porque no todos los bienes y servicios que circulan en la sociedad son de la misma naturaleza. Desde hace muchos tiempo economistas y filósofos, y el sentido común, han identificado que los bienes y servicios no deben ser medidos con la misma vara. No se pueden comparar productos durables y productos efímeros, servicios de uso privado y servicios públicos, productos que se agotan en el acto de ser consumidos con bienes que se acrecientan cuando son puestos al servicio de los demás, como los de la economía del cuidado o los aprendizajes de los conocimientos compartidos.

La diversidad de monedas según los distintos tipos de bienes y servicios y según las diversas regiones del mundo plantea entonces el espinoso problema del intercambio de monedas. Hoy, en torno al dólar, que sigue siendo la moneda dominante, sólo 2-3 monedas se disputan la hegemonía económica y política, el euro, el yen y cada vez más el yuan. Los tipos de cambio entre estas monedas, entre ellas con otras ya existentes y con las nuevas monedas que es preciso crear, es una cuestión crucial que pone en evidencia la necesidad de construir una nueva gobernanza, una nueva regulación de los intercambios a escalas locales, regionales, pero sobre todo a nivel mundial, puesto que es allí donde se disputa el

control de la economía y del mundo en esta época de mundialización cada vez mas omnipresente.

Es evidente que las bases de esa nueva gobernanza deben superar los límites del sistema vigente el cual ha entrado en una crisis prolongada. Los sistemas financiero y monetario regulados por acuerdos entre algunos gobiernos del G-20 con intervención del FMI y los bancos centrales de las economías dominantes hace aguas de manera recurrente. La fragilidad del sistema vigente es tal que los endeudamientos de las principales economías, de Estados Unidos y Europa, vulneran incluso las bases de las economías de las llamadas potencias emergentes arrastrando a todo el mundo al callejón sin salida de las crisis actuales.

La disparidad de regímenes sociales y económicos, las estructuras laborales entre las diversas regiones y países, provocan diferencias de productividad entre las economías. Los salarios de los obreros chinos, principalmente obreras, no pueden ser comparados con los de los alemanes, los sistemas productivos en las minas de carbón del norte de China o en las fábricas del Sur de India no se pueden comparar con las fábricas de automóviles de Estados Unidos. La monocultura del soja round up en el Mato Grosso brasileño es mucho mas competitiva que la policultura agropecuaria del Cantal francés. Los ejemplos son miles, pero las diferencias de productividad del trabajo son enormes e implican disparidades no sólo entre los países sino al interior de ellos. Puesto que no es posible homogeneizarlos, la uniformización a través de un mercado capitalista desregulado pero controlado por las transnacionales y las prácticas oligopólicas es, a todas luces, no sólo ineficaz, sino además injusta. La cuestión de la gobernanza de la regulación de los tipos de cambio entre monedas múltiples, específicas a distintos regímenes económicos es entonces el nudo gordiano que debemos desatar si queremos hacer viable la transición de una economía capitalista en crisis hacia nuevos sistemas económicos justos y eficaces.

La nueva gobernanza de los sistemas financieros y monetarios debe reposar en pilares democráticos, sostenibles y solidarios. Esto no es una cuestión puramente ética. Lo es por cierto puesto que la economía justa, solidaria y sustentable está basada sobre fundamentos éticos capaces de sustentar la vida y el planeta. Pero además estos pilares son eficaces porque son capaces de responder a las crisis financieras y monetarias puesto que hacen posible evitar las prácticas de todos los tipos de dumping (monetario, fiscal, social, ecológico) causantes de desequilibrios que afectan las condiciones de vida de los sectores populares y dividen a los trabajadores de distintos países y regiones.

Es por ello que una nueva economía requiere de una suerte de *Fondo Monetario Solidario*, conformado democráticamente por todos los actores directamente involucrados: no sólo los gobiernos, sino también los sindicatos, las organizaciones empresariales, las redes de la economía solidaria, las cooperativas y otras agrupaciones populares y campesinas, etc. Una autoridad de este tipo será capaz de regular las fluctuaciones de los tipos de cambio y evitar disparidades que además de provocar desequilibrios sociales y económicos, dañan la indispensable solidaridad entre todos los actores de la economía, especialmente entre los trabajadores.

Es por ello, también, que se debe remodelar el sistema de endeudamiento anulando todas aquellas deudas provocadas por actividades especulativas y favoreciendo modalidades de plazos y de interés que no bloqueen la capacidad de desarrollo económico de muchos países ni hagan caer sobre los funcionarios públicos, los trabajadores y los sectores mas pobres la pesada carga de ese endeudamiento ilegítimo. El peso de este endeudamiento se torna insoportable cuando al mismo tiempo son enormes los esfuerzos de los sectores pobres y medios empobrecidos, los que asumen la responsabilidad de contribuir con su trabajo y sus escasos medios a generar los recursos financieros locales imprescindibles a las políticas de educación, salud, vivienda y otras necesidades sociales.

Finalmente, aunque ésta pudiese ser la primera propuesta en este campo, una cuestión de justicia histórica es la legítima reivindicación de los pueblos de los países del Sur, principalmente de los mas pobres, de revertir la lógica del endeudamiento reclamando el pago de la deuda que las potencias que lideraron la expansión del capitalismo desde Europa y Estados Unidos han contraído durante siglos explotando las riquezas, sometiendo a los pueblos, provocando las migraciones forzadas y la esclavitud. Esta deuda contraída por las potencias expansionistas contiene no sólo dimensiones económicas, sino además ecológicas, tan grandes han sido los daños a la naturaleza y tan importante ha sido la explotación de los bienes agrícolas, mineros y del mar abundantes en las regiones del Sur del planeta. En este contexto, la denominada ayuda al desarrollo que los países ricos deben otorgar a los pobres debe aumentar, y dejar de disminuir como ha venido ocurriendo en los últimos años. En el fondo, no se trata realmente de una ayuda, sino de una reparación moral y financiera elemental que los gobiernos de los países ricos debieran respetar. Asimismo, los programas de ayuda que están implementando los países emergentes no deben imponer nuevas relaciones de dependencia que reproducen los mecanismos propios a las lógicas imperialistas de potencias dominantes.

4.

Transitar del crecimiento ilimitado hacia un “decrecimiento diferenciado” y un “crecimiento orgánico”

El crecimiento ilimitado continúa siendo el padrón fundamental del modelo actual. La economía oficial mundial continúa midiéndose según el PIB en lugar de otros indicadores mucho más fidedignos del bienestar humano que ya están demostrando su fiabilidad. Se debe superar esta “cultura” de crecimiento imparable así como el fetiche tecnológico al servicio de la acumulación y el consumo sin freno. Las externalidades ecológicas y sociales, que siguen siendo ignoradas por este modelo, ya han alcanzado niveles peligrosamente insostenibles, de no retorno en el caso del impacto ambiental, y de explosión social violenta e incontrolada en las sociedades. Por otro lado, la emergencia de las nuevas tecnologías y la deslocalización de las fuerzas productivas han transformando las relaciones entre capital y trabajo, erosionando las condiciones económicas y sociales de las mayorías.

Entre las falsas alternativas se postula la creencia que la geotecnología, la nanotecnología y otros avatares tecnológicos podrían no sólo reducir los impactos medioambientales sino además resolver los problemas por medios técnicos. Desde tiempos inmemoriales los alquimistas y más recientemente algunos científicos creen de la solución está en dominar, en manipular a la naturaleza y la especie humana. Estos científicos e ingenieros, vinculados estrechamente a transnacionales de la alimentación, la farmacéutica, el transporte, la energía están desarrollando investigaciones y promoviendo proyectos que constituyen un peligro puesto que se ha comprobado que esos procesos y productos provocan efectos dañinos e irreparables en la vida y en los ecosistemas.

Obviamente no se trata de rechazar la innovación tecnológica. Los nuevos productos y tecnologías son necesarios. El punto es que dejados en las manos de círculos pseudo científicos y utilizados por transnacionales sin control, dichos productos y tecnologías no hacen más que agravar los problemas. Es por tanto indispensable una nueva

gobernanza de la innovación científica y una regulación transparente de los medios financieros y los proyectos de investigación tanto privados como públicos.

Por otra parte han surgido teorías que postulan el decrecimiento y la prosperidad sin crecimiento. Pero un decrecimiento generalizado no es viable y requiere una adaptación a cada caso. Plantear el decrecimiento es inaceptable por vastos sectores en países y regiones pobres, con extremas carencias. Limitar el consumo a quienes no lo tienen, después de que otros lo han tenido y mucho, no es justo ni viable. Empero, no se trata de promover una “revancha” de los pueblos del Sur contra los ricos del Norte para llegar a alcanzar los niveles de riqueza de los países denominados desarrollados. Esta tendencia, aunque presente en los imaginarios de sectores medios y pobres de los países del Sur, vehiculada por la publicidad que promueve como modelo de bienestar el modo de vida de clases acomodadas, no sólo agrava aún más los problemas ecológicos y sociales, sino que está siendo cada vez más cuestionada. Ya no se puede ocultar que los sectores empobrecidos y viviendo en precarias condiciones en los países del Norte son cada vez más numerosos, lo que devela aún más las desigualdades y los límites que el modelo dominante conlleva.

En lugar de un decrecimiento lo que hace falta es regular dónde y cómo se crece, avanzar en un “decrecimiento diferenciado o selectivo”, en que algunas regiones o países pueden crecer todavía por un tiempo, evitando al máximo posible los efectos perniciosos del modelo productivo y de consumo actual, mientras se resuelven las urgencias de sus poblaciones. El decrecimiento diferenciado necesita nuevos estándares también diferenciados. El PIB ya no sirve, ni siquiera un “PIB ampliado”. En su lugar, se pueden proponer las llamadas “3P” (producción, personas, planeta) como ámbitos generadores de indicadores complejos que valorizan un crecimiento orgánico, a escala humana, en el que la producción, el consumo, la distribución son respetuosas de las ne-

cesidades de las personas y del planeta, gracias a una economía justa y sustentable. Sólo orientándose en esta perspectiva, se puede plantear un decrecimiento rápido del carbono, con compensaciones variables según el costo social y humano en función de las diferencias regionales y del nivel de riqueza de los países.

Se puede hablar entonces de un “crecimiento orgánico”, adaptado a las necesidades de las sociedades, las que a su vez deben adaptarse a las posibilidades del medioambiente en el que habitan. Al respecto, la medición de la “huella ecológica” constituye una herramienta, entre otras, para calcular y gestionar el crecimiento o decrecimiento cualitativo como el propuesto.

Pero ¿quién regulará este crecimiento diferenciado? Sin una nueva gobernanza mundial, es una tarea difícil por no decir imposible. Es por ello que una nueva arquitectura del poder a nivel mundial -basada en el reconocimiento de la interdependencia de los pueblos entre sí y con el planeta- es indispensable para frenar el casino especulativo y el modelo de crecimiento que nos lleva al despeñadero.

5.

La producción y el consumo no deben estar guiados por el mercado sino por la satisfacción de las necesidades. La urgencia prioritaria es reducir las desigualdades y erradicar la pobreza

En el momento de repensar la producción y el consumo no se puede ser indiferente al hecho de que 1.200 millones de seres humanos viven con menos de un dólar al día y otros 1.800 con menos de dos dólares al día. En este contexto, afirmar que el auge reciente de los países llamados emergentes es un medio de redistribución geográfica de los recursos mundiales es un argumento incoherente, puesto que en realidad dicho auge tampoco resuelve el problema de la creciente desigualdad donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, en todos los países, sobre todo en los emergentes. La miseria no sólo en vastas regiones rurales sino también en las grandes ciudades de China, India, Africa del Sur y Brasil, por ejemplo, es una realidad que no se puede ocultar detrás de las vitrinas y barrios de una clase media y rica en ciudades fragmentadas urbanística y socialmente.

La economía actual se basa en la creencia de que es necesario acumular primero para distribuir después. Se trata de una falacia que no resiste a la porfiada realidad de la desigualdad creciente. Ya ha sido comprobado que las llamadas “teorías del chorreo” no son más que ideologías profundamente injustas. El resultado han sido niveles muy elevados de pobreza para muchos y de acumulación individual para pocos. Se debe acabar también con la creencia según la cual el crecimiento genera automáticamente bienestar y felicidad, ignorando el alto coste ecológico y social que las sociedades están pagando por ello. Los pasivos ambientales deben incorporarse a las contabilidades pública y privada. El crecimiento a cualquier precio aunque sea revestido de matices ecológicos, ya no es un modelo viable.

Los procesos de producción deben regularse siguiendo criterios de sustentabilidad ecológica y social. Esta mirada global, compleja, al poner la atención en las relaciones entre las diversas dimensiones económicas y productivas permitirá evitar aquellos procesos productivos y tecnológicos, tales como la sustitución de combustibles fósiles por biomasa, por ejemplo, que pretendiendo responder al necesario remplazo de combustibles contaminantes por productos menos dañinos provocan desequilibrios profundos en los sistemas agrícolas y alimenticios.

En cuanto al consumo, debe rechazarse la ideología que hace de éste, junto con la del crecimiento de la producción, el modelo de desarrollo, único y predominante, y el medio indispensable de inclusión y cohesión social. El modo de vida que hace del consumismo el medio de realización individual debe ser cuestionado radicalmente. La publicidad que lo promueve no sólo constituye una actividad lucrativa irresponsable, sino además, atenta contra la dignidad de las personas. Lo que deviene indispensable es construir un nuevo modo de vida basado en la noción del “buen vivir”. No se trata de volver a un pasado bucólico inexistente. Esto implica un cambio individual profundo acerca del sentido de la vida, de lo que a uno y a sus seres queridos los hace ser feliz. Además, conlleva cambios económicos y sociales considerables en los sistemas laborales, los tiempos consagrados al trabajo, los impactos en los sistemas de pensiones y de salud.

En este contexto deben denunciarse también los métodos de obsolescencia programada que reducen cada

vez más la vida útil de las mercancías, reclamando una información obligatoria sobre la duración de los productos. Finalmente, sin cerrar este enumerado, es necesario disminuir el crecimiento del consumo superfluo o de lujo, promoviendo en cambio un consumo ponderado de bienes de calidad, elegantes, propios de un modo de vida agradable pero respetuoso de las personas y del planeta.

La substitución de la economía actual por una nueva sólo será posible mediante un proceso progresivo de multiplicación y articulación de iniciativas a escala humana, territorial.

Algunas propuestas que refuerzan esta tendencia, basadas en experiencias ya existentes, son, por ejemplo:

- La valoración y articulación de las iniciativas que apuntan hacia otra economía, las experiencias de economía alternativa, social, solidaria, que ya se desarrollan en todos los continentes y en las que el factor económico se subordina a las dimensiones ambientales y sociales. Al respecto se cuenta con ricas experiencias no sólo a nivel local, sino también internacional que ilustran la nueva economía que se requiere. Los fondos éticos, los avances en algunas leyes de protección social, los programas de salarios básicos u otras formas de remuneración a cambio de trabajos organizados comunitariamente, las redes de comercio justo, etc. no sólo responden a necesidades de las poblaciones concernidas, sino además constituyen sistemas económicos innovadores que involucran a miles de personas e indican que otra economía es posible porque ya está en marcha.
- La puesta en práctica de formas de producción a escala local con tecnologías sustentables y orgánicas, que no estén limitadas por un régimen de propiedad intelectual que despoje a las poblaciones locales de los saberes ancestrales y de su propia capacidad de innovación.

Es preciso así ir mas allá de la dimensión territorial y local. Es evidente que otros actores, además de los Estados, juegan un rol importante en la economía mundializada. Redes internacionales de la sociedad civil y de los movimientos sociales, así como también las empresas que respetan el medioambiente y los derechos de los trabajadores, son de ahora en más imprescindibles. Los Foros Multi-Stakeholders, que reagrupan al conjunto de actores de un sector de actividad o de un ámbito, representan una innovación prometedora. La ventaja de pensar en esta estructura es que permite superar el marco puramente territorial. Ella fortalece el basamento territorial de los actores, trabajadores, empresarios, responsables de colectividades locales, pero posicionándose dentro del marco global del sector de

actividad, atravesando los territorios puesto que pone en primer plano a los actores, donde éstos se encuentren, desde la localidad hasta la red mundial. Pero en este contexto los foros multistakeholders no deben ser una instancia de legitimación del poder de las transnacionales. Hay que inventar y construir estructuras que articulen las instituciones y organizaciones de lo local a lo mundial donde el poder de las transnacionales pueda ser efectivamente controlado.

6.

La relación de los seres humanos con la naturaleza debe replantearse desde una perspectiva de cooperación

Quizás uno de los paradigmas más perversos con los que se construyó la modernidad es la concepción de Bacon según la cual hay que torturar a la naturaleza para sacarle sus secretos. Ese postulado es una aberración que ha causado un daño inconmensurable a la vida y al planeta. Hay que levantar un nuevo paradigma de coexistencia y cooperación de la humanidad con la biosfera y elevarlo a la categoría de norma fundamental en el derecho internacional, desarrollando a partir de allí objetivos y agendas relacionados para alcanzar un estado de “coexistencia equilibrada”. Este “equilibrio” debe ser comprendido como una situación de adaptación mutua, permanente, entre la actividad humana y la biosfera, en la que ambas seguirán siendo a su vez procesos dinámicos en sí mismos. No se trata pues de la búsqueda ilusoria de una imposible situación estática de retorno a un estadio ideal premoderno de la naturaleza.

En este contexto, pretender modernizar la estructura de acumulación capitalista y darle una nomenclatura de color verde es un postulado por lo menos contradictorio. El modelo oficialista que propugna una “economía verde” no es más que una nueva forma ideológica de dominación en la que la naturaleza y el destino de las poblaciones más pobres se sacrifica en nombre de un nuevo tipo de desarrollo que en adelante estaría justificado por la acción certificadora de una autoridad “ecológica”. La marca verde no debe ser un nuevo pretexto de dominación económica en un contexto de competencia en el que las grandes empresas buscan imponer su propia idea de sustentabilidad. Parafraseando el adagio popular: “la economía capitalista aunque se vista de verde, capitalista se queda”. Hay que evitar por tanto caer en la trampa de un discurso que pretende que una economía verde, donde el acento está puesto en tecnologías renovables, vaya a crear empleos verdes, transporte verde, viviendas verdes. Es evidente que no se trata de una cuestión de colorido. La nueva economía que se debe promocionar debe ser justa y sustentable.

En el caso específico de la certificación de productos, es necesario promover mecanismos que sean resultado de un proceso acordado entre actores que tome en cuenta las cuestiones sociales y medioambientales. La certificación de los productos es en muchos casos favorable a las grandes empresas transnacionales e incompatible con la realidad de las necesidades de los campesinos, los trabajadores y los consumidores.

7.

La economía del cuidado debe ser valorada porque responde a necesidades humanas vitales y fundamentales

Il faut changer la conception que l'on a sur le travail de production et de reproduction en le mesurant et en le réglementant. Pour cela, il faut déprivatiser l'économie familiale et rémunérer le travail domestique.

Il existe des expériences réussies de politiques liées à l'économie du soin, où les États, les organisations sociales et territoriales ont assumé une grande partie de l'infrastructure de la garde d'enfants, ont accordé des aides aux pères et aux mères pour la garde et ont encouragé les entreprises publiques et privées à octroyer des facilités aux travailleuses qui désirent concilier emploi et soin de la famille. On n'a pas pour autant atteint l'objectif de reconfigurer les rôles traditionnels.

L'économie du soin ne concerne pas que les enfants et les parents. Elle assume en plus des tâches essentielles de soin des personnes âgées, des handicapés, de ceux qui souffrent de maladies diverses et variées.

Une intégration complète de l'économie du soin dans l'élaboration des politiques économiques impliquerait de développer un longue liste de propositions, parmi lesquelles :

- l'incorporation et la valorisation du travail de soin de la famille non rémunéré dans les comptabilités nationales ;
- la provision publique de services pour la famille : l'augmentation et la directionnalité de la dépense dans la provision de services sociaux de soin et leur intégration dans un système de protection sociale inclusive ;
- une régulation publique très active des services de soin moyennant des mécanismes d'incitation et de contrôle de son fonctionnement pour éviter des pratiques oligopolistiques ;
- régulations dans le marché du travail : élargir les autorisations parentales des hommes, revoir et approfondir

le caractère obligatoire de mettre en place des garderies dans les lieux de travail, promouvoir des politiques de conciliation travail-famille.

- sensibiliser à la répartition équitable des responsabilités du soin dans une optique de transformation culturelle ;
- donner aux personnes qui se consacrent aux tâches de soin les mêmes droits sociaux qu'aux autres.
- redessiner les institutions sociales de façon à ce qu'elles garantissent la sécurité socioéconomique des personnes, moyennant la provision publique de services d'emploi des femmes dans le domaine du soin, ou d'allocations pour celles qui réalisent déjà ces tâches.

8.

Promover y desarrollar la seguridad y la soberanía alimentarias

La seguridad alimentaria consiste en asegurar que una alimentación adecuada esté disponible de forma permanente para una comunidad determinada. La soberanía alimentaria es la capacidad de la toma de decisiones de esas comunidades (entre ellas los propios Estados) respecto al modelo alimentario que desean establecer. Obviamente no se trata de pretender una autarquía ni impedir los indispensables intercambios comerciales, de información y tecnológicos que se requieran entre territorios diferentes. Se trata de favorecer los lazos de cooperación y de complementariedad y no hacer de esas diferencias un medio de explotación y dominación.

Uno de los problemas acuciantes es que las empresas transnacionales agroindustriales y otras similares interfieren en las políticas públicas y en el desarrollo de los territorios con la intención de continuar extendiendo sus intereses comerciales e ignorando los costes sociales y ecológicos de sus estrategias expansionistas. Hace falta por tanto desarrollar nuevas formas de control y regulación de la acción de dichas empresas sobre los territorios.

Para ello, en primer lugar, es preciso regular los precios de los alimentos en el mercado internacional. Se debe dar prioridad a la capacidad de las comunidades de identificar sus necesidades y gestionar los recursos de sus propios territorios para satisfacer estas necesidades adelantándose a las dinámicas globales dominantes movidas por el afán incesante del lucro. Esto debe ser así tanto para la alimentación como también para otros sectores del comercio internacional que se encuentran concentrados en pocas manos.

Para que la soberanía alimentaria sea viable es necesario:

- Declarar la alimentación como un derecho humano fundamental, garantizado por las Constituciones de todos los países y por el derecho internacional.
- Implementar reformas agrarias favorables a la población campesina sin tierra, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas.

- Asegurar la protección de minorías étnicas, pueblos indígenas y poblaciones rurales.
- Acabar con los desplazamientos forzados, el acaparamiento de tierras y aguas.
- Proteger los bienes naturales, especialmente la tierra, el agua, las semillas y las cosechas. Asegurar el derecho a practicar una gestión sustentable de los bienes y de la conservación de la biodiversidad.
- Por ello es indispensable desprivatizar y desmercantilizar las semillas y las aguas, bienes comunes esenciales si se quiere lograr la seguridad y la soberanía alimentarias.
- Reorganizar el comercio agroindustrial: se debe priorizar la autosuficiencia y la producción para consumo doméstico, frente a la distorsión de precios de los mercados internacionales.
- Favorecer la participación por parte de los campesinos y las organizaciones sociales de pobladores urbanos en la formulación de las políticas agrícolas y alimentarias en todos los niveles de decisión, desde las localidades a las negociaciones internacionales.
- Valorar y desarrollar la agricultura biológica, rechazando los transgénicos y agrotóxicos, preservando y fortaleciendo la biodiversidad.
- Crear una instancia de regulación de los stocks alimentarios.
- Reforzar la localización y la territorialización, produciendo y consumiendo en circuitos integrados, aproximando la producción al consumo. Se trata también de usar menos energía y menos recursos materiales, produciendo en cada lugar para consumir en ese mismo lugar en circuitos cortos.
- Esta relocalización debe ser entendida como un proceso que disminuye los impactos ambientales sobre el planeta e inventa nuevas formas de participación social y ciudadana. No debe confundirse con una relocalización aislacionista que se opone al funcionamiento de los flujos comerciales y que dificultaría la seguridad alimentaria entre países.
- Promover la reorganización de las grandes empresas para ponerlas al servicio de la población y no de los accionistas y sus dueños. Las empresas transnacionales pueden jugar un rol importante dada su capacidad de

gestión globalizada. Empero es necesario una regulación articulada con las instancias internacionales, los estados y las asociaciones territoriales para impedir practicas oligopólicas o dañinas a los ecosistemas.

- Establecer códigos de conducta obligatorios para las transnacionales y definir contratos sustentables entre los Estados y dichas empresas con mecanismos transparentes y participativos de evaluación y control.
- En el caso de la certificación de productos, consensuar los intereses de los agricultores, del gobierno y de las empresas para que los certificados dejen de ser una forma de dominación de las grandes empresas sobre las medianas y pequeñas y sobre las organizaciones campesinas.

9.

Formular y promover una economía de los bienes comunes

La economía neoclásica ha privatizado una parte importante de los bienes comunes: el agua, las semillas, las comunicaciones, la educación, el conocimiento, la cultura, la salud... Se trata de bienes que deben servir para asegurar servicios esenciales considerados públicos o de interés público. Se debe rechazar por tanto la privatización de éstos y otros bienes comunes. Pero hace falta formular legalmente a escala local y mundial el alcance y los límites del interés público e inscribirlo en el derecho internacional y en las Constituciones. Esto permitirá el desarrollo de una economía de los bienes comunes con sus propias reglas, diferentes de las del mercado de los bienes privados.

Por ejemplo, el conocimiento debe ser gestionado como bien público no privatizable, colocando las patentes al servicio colectivo y controlando los riesgos de su uso. El proceso de desarrollo del conocimiento no puede ser acaparado por empresas o sectores privados puesto que es una construcción colectiva. La innovación ha de ser considerada y tratada como un bien público y no como la creación y propiedad de una empresa o un científico particular, pues no ha sido la empresa ni el científico por sí sólo los autores de la innovación, sino la experiencia colectiva y el conocimiento acumulado por comunidades y pueblos.

10.

Hacer posible la transición hacia una biocivilización por la sustentabilidad de la vida y el planeta

La crisis provocada por el carácter acelerado y probablemente irreversible del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, requiere respuestas colectivas por parte de los gobiernos y la ciudadanía. La naturaleza no entiende de barreras políticas o sociales y la dimensión global de esta crisis anula el efecto de cualquier acción iniciada unilateralmente por gobiernos o instituciones sectoriales, por poderosos que unos u otras puedan ser. El cambio climático, la polución oceánica y atmosférica, los riesgos nuclear y de manipulación genética, la reducción y extinción de los recursos y de la biodiversidad, se cuentan entre las diversas manifestaciones de ese impacto acelerado y probablemente irreversible.

Las medidas para hacer frente a estos graves problemas existen. Quizás uno de los rasgos más absurdos de la situación actual es que los científicos, los responsables políticos, los dirigentes empresariales, numerosas organizaciones de la sociedad civil, no sólo están conscientes de la gravedad de la situación, sino además conocen o comprenden las políticas económicas, tecnológicas y financieras necesarias para hacer posible el tránsito hacia un mundo sustentable. Otro rasgo, igual o más absurdo, es el representado por el gasto militar y el financiamiento de una militarización en armas, tecnología y aparatos bélicos que no sólo no resuelven durablemente los conflictos, sino sobre todo hacen recaer sobre la población los daños económicos, sociales y psicológicos más profundos de la guerra y los conflictos armados. Aunque puede parecer una afirmación estéril, no se puede dejar de afirmar que con los recursos destinados al gasto militar se podrían evitar la muerte cotidiana de millones de seres humanos y resolver los problemas urgentes de salud, acceso al agua, alimentación indispensable, educación básica de miles de millones de habitantes que subsisten en condiciones extremadamente precarias.

Un nuevo contrato social por la sustentabilidad de la vida y del planeta que reúna gobiernos, responsables de grandes empresas, organizaciones de ciudadanos, comunidades territoriales constituye una necesidad urgente. Sin embargo, la lógica de la competencia y de los bloques puede levantar obstáculos insalvables e imposibilitar dicho contrato. Ante este escenario incierto, las organizaciones de la sociedad civil, las redes y movimientos sociales tienen la responsabilidad de levantar y llevar adelante propuestas para enfrentar esos desafíos. Es posible que en ese esfuerzo sean respaldados por aquellos gobiernos y responsables de grandes empresas e instituciones multilaterales que logren superar las visiones cortoplacistas y excluyentes.

En cualquier caso, se enumeran ahora algunas de las pistas orientadoras de propuestas para la sustentabilidad de la vida y del planeta:

El eje de cualquier estrategia de la descarbonización con miras a favorecer la sustentabilidad debe estar, en primer lugar, en la extensión masiva de las energías renovables y de la infraestructura que requieren. Además, para que la transición energética de las energías fósiles a las renovables sea eficaz no se debe hacer descansar todo el esfuerzo en la cantidad de nueva energía producida. El cambio de las matrices energéticas es un proceso lento con inercias tecnológicas, culturales e institucionales. La sustentabilidad sólo puede tener éxito si, al mismo tiempo, dicho esfuerzo tecnológico es acompañado por un cambio progresivo pero profundo del estilo de vida derrochador, sobre todo en los países industrializados y recientemente industrializados, haciendo posible al mismo tiempo el ahorro de energía y la eficiencia energética.

Es indispensable que aquellos países que están planeando utilizar o aumentar el uso de la energía nuclear renuncien lo antes posible a esos proyectos. Los riesgos de las instalaciones nucleares ya están totalmente comprobados y no se puede pretender ignorar los problemas aún no resueltos en materia de almacenamiento final y el peligro de proliferación incontrolada. Las instalaciones existentes deben ser sustituidas por tecnologías renovables o simplemente deben ser cerradas lo antes posible. Obviamente la eliminación gradual pero acelerada de la energía nuclear no debe ser compensada por el aumento de la energía de fuentes fósiles, en particular las basadas en el carbón.

Es necesario implementar políticas públicas de estímulo a las inversiones en industrias, tecnologías e investigación de fuentes de energía renovable. Paralelamente, los subsidios a las empresas productoras de energía fósil deben ser suprimidos y los impuestos aumentados. Los estados pueden utilizar su poder de compra orientando los precios de manera a favorecer las empresas productoras de energía renovable en detrimento de las productoras de energía basada en fuentes fósiles. Apoyando estas mutaciones tecnológicas e industriales, tanto los estados como las empresas y las organizaciones de la economía social y solidaria deben implementar mecanismos de *ecología industrial o circular* favoreciendo las sinergías entre los procesos productivos. Asimismo, es necesario promover nuevas empresas que ofrezcan servicios funcionales a necesidades de vivienda, transporte, comunicaciones y otros pero que no impliquen pesadas instalaciones, sino que favorezcan una *economía de funcionalidad* donde el acento está puesto en un servicio fluido y no en aparatos o infraestructuras onerosas.

Esta articulación industrial, tecnológica, institucional requiere desarrollarse en un espacio ampliado a través de una reconfiguración transnacional de los territorios que corresponda con las nuevas matrices energéticas renovables, donde lo esencial es la articulación entre varias fuentes que requieren un sistema integrado de abastecimiento de energía eólica, fotovoltaica, solar, térmica, maremotriz, biomasa, etc., y donde “el territorio energético”, por llamarlo de alguna manera, se extiende ampliamente más allá de las fronteras.

La protección del clima es una condición vital fundamental para hacer posible la sustentabilidad. Es por ello que los objetivos de descarbonización mundial deben establecerse ahora y alcanzarse antes de finales de esta segunda década. Un mundo sustentable no sólo será posible con nuevas matrices energéticas y con la protección del clima. Es preciso además cuidar especialmente la vida de los sistemas que también incluyen otros bienes naturales como tierra fértil y la diversidad biológica.

Empero, no se debe soslayar el hecho que la reducción drástica y acelerada de las emisiones de carbono sólo puede tener éxito si se trata de un objetivo común, aplicado simultáneamente en muchas regiones del mundo. Es allí donde radica el eslabón débil de la cadena. Tanto los gobiernos, enmarcados en un sistema estatal delimitado por fronteras e intereses que no se corresponden con las dimensiones de los ecosistemas, como las empresas transnacionales, enfrascadas en sus estrategias específicas, no son los actores capaces de responder a los desafíos de la transición energética, de la protección del clima y de la sustentabilidad del planeta.

En todo caso, es necesario insistir en implementar ahora políticas energéticas con el objetivo de:

- Llegar a sistemas energéticos totalmente descarbonizados a más tardar en 2050. La demanda mundial de energía final no debe subir y en todo caso no debe aumentar en el horizonte de 2050 más allá de los niveles vitales a la vida y al planeta. Este desafío es un imperativo central. Sin caer en el catastrofismo ya hay suficiente evidencia científica y empírica que demuestra que la humanidad ha sobrepasado los límites de la viabilidad física de los ecosistemas.
- En este lapso dar prioridad al acceso a la energía renovable a más de 3 mil millones de personas que actualmente viven en condiciones de pobreza energética.
- Canalizar la urbanización acelerada hacia políticas urbanas sustentables.
- Hacer un uso de la tierra y de los recursos de la pesca en condiciones compatibles con la protección del clima, en particular, la silvicultura y la agricultura.
- En cuanto al uso de la tierra, el acaparamiento debe ser frenado y controlado, la atención debe centrarse en poner fin rápidamente a la deforestación y a la degradación de los bosques, y fomentar una agricultura de bajo carbono.
- Apoyar la investigación en tecnologías sustentables y promover la transferencia internacional de tecnologías bajas en carbono.
- Fomentar la educación respetuosa de la vida y del planeta sobre todo en los niños y los jóvenes ya que son los portadores del futuro y serán los habitantes de un mundo sustentable.

HACIA LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS EN RIO+20

Con miras a la Cumbre de los Pueblos en junio 2012, es necesario anticipar de forma coherente soluciones que sean alternativas profundas y viables ante las posturas oficiales de inacción, de retórica evasiva o de apuesta por más tecnologías llamadas verdes. Elaborar propuestas concretas, el cómo, en qué plazos, de qué forma, para quién es indispensable. Las pistas abiertas en este documento buscan contribuir a ese esfuerzo y avanzar propuestas específicas para enfrentar y superar los desafíos del presente y del futuro.

Es posible que algunos gobiernos, mas abiertos a las demandas sociales, podrían contribuir a implementar algunas de las propuestas aquí mencionadas en pos de una nueva economía. Sin embargo, lo mas probable es que el sistema de negociación intergubernamental no tome en cuenta estas propuestas ni sea capaz de llevarlas a cabo...si alguna prospera. Hace ya mas de 20 años que centenas de declaraciones, acuerdos, protocolos, convenciones y otros medios declarativos o jurídicos han sido publicados y firmados sin enfrentar los desafíos ni responder eficazmente a las crisis sucesivas que han venido caracterizando la transición, en la cual la economía mundial y las sociedades han entrado en estas primeras décadas del siglo 21.

La clave es entonces vincular las respuestas a los graves problemas urgentes de la coyuntura a corto plazo, con las propuestas a mediano plazo, manteniendo vigentes los principios que orientan las transformaciones hacia una economía justa, sustentable y solidaria a largo plazo.

www.gobernanza-mundial.org



Este cuaderno es publicado con el apoyo de la Fundación Charles Léopold Mayer

fph | Fondation Charles Léopold Mayer
pour le Progrès de l'Homme